

en su calidad de asesor jurídico de la embajada de S. M. Británica sobre la expropiación de bienes de Rosas, adquiridos por súbditos británicos.]

[Buenos Aires, 26 de abril de 1852]

/Buenos Aires, 26 de abril, 1852.

Tengo el placer de dar á Vd. la opinion que me ha pedido sobre el decreto de marzo 12 de 1852, relativo á la devolucion de los bienes quitados á los argentinos bajo el pretexto de ser unitarios.

El gobierno de Buenos Aires ordenando por el espresado decreto la devolucion á sus legítimos propietarios de los bienes de que habían sido despojados no ha hecho sino llenar un deber de rigurosa justicia.

Existen en este pais desde la emancipación del dominio español que acuerdan la mas completa / inviolabilidad á la propiedad. Por causas políticas no era permitida la confiscacion; solo tenia lugar por crímenes civiles. Pero originándose algunas dudas se resolvió por decreto de mayo de 1835 que la confiscacion quedaba abolida del todo y para siempre. Este decreto fue dado por el ex-gobernador Rosas.

Este decreto está en vigor y siempre lo ha estado. No fué derogado por el decreto de setiembre 16 de 1840 del mismo ex-gobernador Rosas, que se limitó á embargar é impedir la enagenacion de los bienes de aquellos que creia sus enemigos, para privarlos de los recursos que tenian y que creia empleaban contra él. / En los desórdenes de esta administracion, algunos malos hombres tolerados tácitamente por el ex-gobernador Rosas se apoderan de sus bienes, despojándoos de ellos.

No ha habido ningun acto oficial de ese gobierno confiscando estos bienes, ni podia haberlo, porque aunque tenia un poder extraordinario era solo para tomar medidas políticas, pero no para usurpar los derechos civiles de los ciudadanos.

Los que tenian estos bienes carecian de titulo, los habian despojado ó adquirido de los despojantes y era natural que destruido el poder que impedía el ejercicio de los derechos, se / ordenase la restitution del despojo. Esto es lo que importa el decreto, y no puede ponerse en duda su justicia, tanto mas cuando deja á salvo los derechos de los poseedores para exigir la devolucion de lo que recibió el tesoro, y el importe de las mejoras contra los propietarios.

Tan justo es este decreto, que todos los naturales del pais, por consejo de sus abogados, se han confirmado con él, no habiendo mas casos de oposicion que dos de súbditos británicos y uno de un súbdito frances.

Soy de Vd., etc.

Rufino de Elizalde [Firmado]